AGENDA FEMINISTA DOMINICANA

más allá de los objetivos del Milenio
una publicación de el:

con el apoyo de:

OXFAM

diseño: Lorena Espinoza Peña
impresión: Editora Búho
Santo Domingo, República Dominicana
2013
Presentación:
¿Por qué una agenda específica para las mujeres?  4
1. Autonomía Económica: Acceso a Ingresos y Seguridad Social  5
2. Trabajo Doméstico y de Cuidados (remunerados y no remunerados)  11
3. Violencia Basada en el Género  17
4. Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos  23
5. Participación Política  31
6. Educación  35
7. Género y TICs  39
8. Mujeres Migrantes  43
9. Mujer y Vejez  47
10. Mujer y Discapacidad  51
11. Derechos de la Población Lesbian, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT)  55
12. Mecanismo para el Logro de la Igualdad: Ministerio de la Mujer  59
13. Legislación: La Agenda Pendiente  63
Bibliografía  69
¿Por qué una Agenda Específica para las Mujeres?

A lo largo de las últimas décadas, las mujeres hemos trabajado arduamente en reclamo de derechos y de equidad, y hemos logrado avances importantes que han abierto nuevas oportunidades para las nuevas generaciones de mujeres y niñas dominicanas. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer para superar las desigualdades, la discriminación y la violencia que nos afectan cotidianamente y que siguen limitando nuestro ejercicio ciudadano. Por eso la decisión del Foro Feminista de preparar un agenda que, al enumerar las principales disparidades que siguen caracterizando la sociedad dominicana, sirva de herramienta de trabajo y de estímulo en la lucha por el logro de la justicia de género.

Esta Agenda presenta de manera resumida las principales demandas de la población femenina del país a partir de breves reseñas de su situación actual en áreas de vital importancia para su bienestar. El objetivo de la Agenda Feminista Dominicana es dar a conocer estas demandas a la población general, a las autoridades responsables del diseño e implementación de políticas públicas, programas, planes y proyectos y a los/as tomadores de decisiones en el marco del Estado con miras a asegurar la no discriminación hacia las mujeres en las diversas esferas públicas y privadas.

La desigualdad social, política, económica y jurídica no solo empobrece las vidas de las mujeres, sino que roba recurso humano al desarrollo socio-económico de la nación y obstaculiza la consolidación de nuestra democracia. Erradicar la desigualdad de género no debe ser, por tanto, una cuestión de interés sól para mujeres, sino una prioridad nacional, cuyo logro contribuir al mejoramiento y desarrollo de la sociedad dominicana en todos los órdenes.
AUTONOMÍA ECONÓMICA:
acceso a ingresos y seguridad social
1. AUTONOMÍA ECONÓMICA: acceso a ingresos y seguridad social

La situación actual de las mujeres

Más desempleadas. En el año 2012 el desempleo femenino (21.5%) era más del doble del desempleo masculino (10.1%)\(^1\), siendo las mujeres jóvenes y las que viven en áreas rurales las más afectadas por el desempleo en el mercado laboral dominicano. En el 2011, entre la juventud de 15 a 29 años el 39.3% de las mujeres estaban desempleadas, frente a un 18.8% de los hombres\(^2\).

A pesar de estar más formadas. Dos terceras partes de la matrícula universitaria es femenina. Sin embargo, un 31% de las mujeres jóvenes de 20 a 29 años están desempleadas, frente al 15% de hombres jóvenes del mismo rango de edad, lo que indica que sus mayores niveles de calificación no se traducen en mayores niveles de empleo\(^3\).

Peor remuneradas. En el año 2009, por igual trabajo las mujeres percibían salarios promedio mensuales equivalentes al 79% de los ingresos percibidos por los hombres\(^4\), siendo la brecha salarial más elevada para las mujeres con grado universitario y educación media (28.9% y 28.6% respectivamente)\(^5\). El 51% de las mujeres ocupadas lo está en empleos informales que por su naturaleza las exponen a mayores condiciones de inseguridad laboral y desprotección social\(^6\).

---

1 Banco Central. Febrero del 2012.
2 Datos procesados Observatorio Laboral Dominicano, Ministerio de Trabajo
3 ENFT 2010.
5 Ministerio de la Mujer. VI y VII Informe República Dominicana. Periodo comprendido entre 2003/2011. Ante el comité de expertas para el examen de la aplicación de la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW
confinadas a sectores considerados femeninos, precarios y de baja calificación. Las mujeres se ocupan en sectores considerados tradicionalmente femeninos, poco cualificados, mal remunerados y con déficit de protección social. Casi la mitad del empleo femenino se concentra en el subsector Otros Servicios, donde el 50% del empleo es de baja calificación (servicio doméstico, lavanderías, taquilleras y cajeras, etc.). Están sobre-representadas entre los trabajadores de servicios y no cualificados y sub-representadas entre los técnicos de nivel medio y los empleados y trabajadores cualificados.

con menos acceso a la tierra, al crédito y a activos productivos. Del total de productores agrícolas solo el 10% son mujeres. De ese 10% solo el 72% de las productoras recibe remuneración monetaria por su trabajo, realizando gran parte de ellos trabajo familiar no remunerado que no da acceso a derechos. En la reforma agraria llevada a cabo entre 1997-2000 las mujeres fueron solo el 26% de las personas beneficiadas por el reparto de tierra y el tamaño promedio de las tierras recibidas por ellas fue casi un 30% inferior al tamaño de las tierras recibidas por los hombres. A las mujeres les resulta más difícil acceder a crédito (solo el 44% de los microcréditos son otorgados a mujeres) y a activos productivos.

con protección social de peor calidad. Aunque las mujeres aparentemente están mejor cubiertas por el Seguro Familiar de Salud (52% de personas afiliadas al sistema son mujeres)

---

9 FAO, CONAMUCA y Veterinarios sin Fronteras (2012): La equidad de género en la tenencia de la tierra y los programas de reforma agraria en República Dominicana, Santo Domingo.
su protección es de peor calidad que la de los hombres: 55% de las personas en el régimen subsidiado son mujeres (régimen con menos derechos y no necesariamente vinculado al empleo y una gran proporción de las mujeres afiliadas al régimen contributivo (59%) son “dependientes” del titular, lo cual implica también menos derechos. Adicionalmente, sólo el 36.6% de las mujeres ocupadas tiene un seguro de vejez\textsuperscript{11}.

Más pobres. Los hogares con jefatura femenina son más pobres. El 65% de los hogares registrados como pobres en el Sistema Único de Beneficiarios del Gabinete Social (SIUBEN) tiene jefatura femenina\textsuperscript{12}, mientras que solo el 37.5% de los hogares del país están encabezados por mujeres\textsuperscript{13}.

Las mujeres demandamos

1. Empleo decente con buenos salarios y protección social. La promoción de empleos decentes dirigidos a la población femenina en general, y a mujeres jóvenes y mujeres de las áreas rurales en particular, que disminuyan la brecha respecto a los hombres. De manera específica, propiciar oportunidades de empleo para las mujeres en sectores en auge de la economía como el sector tecnologías de la información y la comunicación (TIC).


\textsuperscript{13} IX Censo de Población y Vivienda de la República Dominicana 2010.
2. **Igual remuneración que los hombres.**
   Políticas dirigidas a disminuir de manera progresiva de la brecha salarial entre mujeres y hombres en todos los niveles de formación, y de manera especial, en el caso de mujeres con grado universitario y de educación media.

3. **Acceso a los puestos de responsabilidad.**
   Políticas dirigidas a incentivar tanto en el sector público como en el privado la promoción de las mujeres a puestos directivos con salarios competitivos y la elaboración e implementación de políticas de contratación no discriminatorias que incluyan medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral y familiar.

4. **Seguridad social.** Desarrollo del sistema de seguridad social que permita incluir al 50% de mujeres ocupadas en el sector informal. Esto incluye a las trabajadoras domésticas injustamente excluidas del sistema a pesar de ser trabajadoras asalariadas.

5. **Reducir nuestra pobreza.** Políticas de protección universales y no focalizadas que no supongan una sobrecarga de trabajo ni perpetúen los roles tradicionales de género como ocurre en los programas de transferencias condicionadas como Solidaridad.

6. **Acceso a áreas laborales consideradas masculinas.** Programas para promover la formación/capacitación de mujeres en labores no tradicionales y su mayor participación en estudios universitarios altamente masculinizados.
7. **Acceso a la tierra y a la actividad agrícola.**
Políticas para fomentar el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y su participación en las actividades agrícolas de manera remunerada y con protección social. Apoyo técnico y crediticio a las mujeres productoras en el marco de un modelo que recupere la agricultura campesina y que garantice la soberanía alimentaria.

8. **Acceso al crédito y al emprendimiento.**
Promover programas y facilidades dirigidos a facilitar las iniciativas empresariales de las mujeres mediante infraestructura financiera de orientación social que integre servicios financieros y no financieros (capacitación, asesoría de inversiones, talleres) y que tenga procedimientos de operación flexibles en cuanto a tasas de interés, calendario de devolución, garantías exigidas, etc.
2.
TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS (remunerado y no remunerado)
2. TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS (remunerado y no remunerado)

La situación actual de las mujeres

Responsables únicas del trabajo doméstico y de cuidados. Muchas más mujeres que hombres asumen el trabajo doméstico y de cuidados gratuito indispensable para el funcionamiento de la sociedad y le dedican más horas de su jornada, siendo esto verdad también cuando las mujeres trabajan fuera del hogar\(^{14}\). Esto supone que la carga global de trabajo de las mujeres es mucho mayor que la de los hombres.

Nos impide acceder al empleo, a la formación y a la participación política. Ser responsables cas exclusivas de los cuidados reduce el tiempo de las mujeres para involucrarse en actividades productivas, para acceder a la educación y la formación, para dedicarse a la promoción profesional y para participar políticamente. Aquellas mujeres que tienen hijos viviendo con ellas poseen una tasa de ocupación más baja que las que no los tienen. El desigual reparto de responsabilidades domésticas impacta en el tipo de negocios que las mujeres ponen en marcha (en sectores vinculados a tareas de cuidados, desvalorizados y a menudo saturados) y es un factor clave en sujetar a las mujeres en la economía informal.

sin que existan apenas políticas públicas de cuidados. En julio de 2012 el país contaba sólo con 91 estancias infantiles para niños y niñas de 45 días de nacidos hasta 5 años de edad a las que asiste la ínfima cantidad de 4,963 niños.

y niñas. Las alternativas de carácter público para el cuidado de personas envejecientes y/o con discapacidad son prácticamente inexistentes. El alto porcentaje de mujeres ocupadas en el sector informal impide el disfrute de la licencia de maternidad de un enorme segmento de la población femenina. En el año 2011 solo 14,316 mujeres se beneficiaron del subsidio de maternidad. En el sector formal la duración de la licencia de paternidad es ínfima y no están contempladas otras figuras como las excedencias laborales por responsabilidades de cuidados, flexibilización de horarios, etc.

discriminadas cuando realizamos trabajo doméstico remuneradamente. La fuerza laboral del trabajo doméstico remunerado (servicio doméstico) está constituida en un 91% por mujeres, siendo este sector uno de los más importantes a la hora de proveer de empleo a las mujeres en el país (el 14% de las mujeres ocupadas en el país lo está en el servicio doméstico). Sin embargo, se trata de un empleo desvalorizado, mal remunerado y que vulnera una gran cantidad de derechos de las mujeres, pues goza de una protección laboral inferior al resto de las ocupaciones en lo referido a su jornada de trabajo, así como el pago de sus servicios y el reconocimiento de las licencias y derechos laborales. En el año 2010 el 78,5% de las empleadas de hogar ganaba un salario por debajo del salario mínimo de las pequeñas empresas (6,035 pesos), siendo el salario promedio de 4,764 pesos. En el año 2007 el 50,2% de las empleadas de hogar estaba en el quintil de ingreso más bajo, proporción que representa sólo un 20% para el total de ocupados del país.

15 Consejo Nacional de la Seguridad Social, boletín de estadísticas Febrero de 2013.
16 Consejo Nacional de la Seguridad Social, boletín de estadísticas Febrero de 2013.
17 ENFT, 2012
1. Expansión de las estancias infantiles y desarrollo de recursos de carácter público para el cuidado de envejecientes y personas con discapacidad. Políticas públicas que establezcan servicios públicos de cuidado (estancias infantiles, centros de atención para personas con discapacidad, etc.).

2. Medidas destinadas a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Establecimiento de medidas que permitan disponer de tiempo para cuidar (licencias para cuidado de personas enfermas, ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, regulación de los horarios laborales que permita compatibilizar las responsabilidad laborales y familiares), cuidando de que estas medidas alcancen también a quienes se desempeñan en el sector informal.

3. Reparto justo del trabajo doméstico y de cuidados dentro del hogar (entre hombres y mujeres) y participación del Estado y las empresas. Impulsar el reparto del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres mediante ampliación de la licencia de paternidad y campañas de promoción de la responsabilidad compartida del trabajo doméstico y el cuidado de los/as hijos/as entre hombres y mujeres. Incentivación a sector privado para que asuman parte de las responsabilidades de cuidado mediante el establecimiento de estancias infantiles en grandes empresas e incrementen su aporte a las cotizaciones sociales para que puedan ser invertidas en infraestructura y servicios de cuidado. Incorporar en el currículo educativo formal temas relacionados con equidad de género y la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados.
4. Mediciones estadísticas sobre el trabajo doméstico y de cuidados. Revalorización del trabajo doméstico y de cuidados mediante la producción de datos que permitan dimensionar la distribución del trabajo doméstico al interior de los hogares y la importancia de dichos trabajos para la economía del país. Realización de una encuesta de uso del tiempo nunca hecha hasta ahora en el país y elaboración de una cuenta satélite de los servicios no remunerados en los hogares.

Agenda legislativa

5. Aprobación por parte del congreso Nacional de las modificaciones legislativas necesarias para la implementación del convenio 189 de la organización internacional del trabajo sobre Trabajo decente para trabajadores y trabajadoras domésticos, incluido el acceso a la seguridad social. Estas modificaciones deben tener en cuenta el hecho de que un porcentaje de las trabajadoras domésticas son haitianas, velando por el respeto a sus derechos humanos.

6. Aprobación por parte del congreso de la firma del convenio 156 sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares y del convenio 183 sobre Protección de la Maternidad.
3. Violencia basada en el género
La situación actual de las mujeres

Enorme cantidad de denuncias por violencia de género sin apenas consecuencias por los agresores. En el 2011 las fiscalías a nivel nacional recibieron un total de 64,869 denuncias por violencia de género intrafamiliar\(^{19}\); de estas, sólo 4\% llegó a los tribunales\(^{20}\). En 2010, de decenas de miles de denuncias, sólo se judicializaron 2\% casos de violencia contra las mujeres, con apenas 66 agresos condenados\(^{21}\), evidenciando un sistema de gestión centrado en el enfoque de la eficaz sanción y la efectiva prevención.

El 20% de las mujeres ha sufrido agresiones física

Una de cada cinco mujeres mayores de 15 años en el país ha sido víctima de violencia física en algún momento de su vida\(^{22}\). La probabilidad para que una mujer de sufrir violencia física es más alta si tiene o tuvo una relación de pareja\(^{23}\). Los riesgos de sufrir violencia física y sexual son aún mayores durante la etapa de la niñez y adolescencia\(^{24}\). Para las mujeres con menos opciones económicas educativas, tiende a aumentar la posibilidad de sufrir violencia física. 22\% de las mujeres sin escolaridad o con educación preescolar 27\% de las mujeres en el quintil más bajo de riqueza han sufrido violencia física\(^{25}\).

---

19 Procuraduría General de la República
21 Fuente: declaración para el día de los Derechos Humanos del 2011, firmada por diversas feministas e institucionalizadas en el movimiento de mujeres dominicanas, entre las cuales: CLADEM-RD, Funceji, MODEMU, Red Nacional de Jóvenes COIN, CIPAF y CMS.
22 Encuesta demográfica y de salud, ENDESA 2007
23 Encuesta demográfica y de salud, ENDESA 2007
24 Encuesta demográfica y de salud, ENDESA 2007
Entre un tercio y un cuarto de las mujeres ha sufrido acoso sexual en el trabajo. Según un estudio del Ministerio de la Mujer-CIPAF, el 28% de las mujeres entrevistadas cara a cara y el 32% de las entrevistadas telefónicamente declararon haber sufrido acoso sexual en el lugar de trabajo, sin diferencias significativas entre el sector público y el privado\textsuperscript{26}.

Víctimas de violencia sexual. En la República Dominicana 1 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia sexual. La probabilidad para una mujer de sufrir violencia sexual es también mayor si tiene o tuvo una relación de pareja\textsuperscript{27}. Existe un sub-registro en los casos de delitos sexuales en contra de las mujeres adultas relacionado con el temor o la vergüenza por parte de las mujeres de denunciar el delito y con manejos inadecuados y prejuiciados por parte del personal policial y de justicia\textsuperscript{28}. Y víctimas mortales de violencia de género en proporciones alarmantes. En el 2012 se produjeron 196 feminicidios, lo que equivale a uno cada 43 horas. La cifra es menor a la del año anterior, cuando se reportaron 233 feminicidios\textsuperscript{29}. Las mujeres haitianas son más vulnerables: fueron el 11% de las asesinadas en el 2011\textsuperscript{30}, en tanto constituyen sólo el 1.6%\textsuperscript{31} de la población del país.

\textsuperscript{27} Encuesta demográfica y de salud, ENDESA 2007
\textsuperscript{28} Proyecto Ciudadanía Activa de las Mujeres. 2012. Obra citada.
\textsuperscript{29} Procuraduría General de la República, Departamento de Estadísticas. Informe sobre Feminicidios Enero – Diciembre 2011.
\textsuperscript{30} Procuraduría General de la República.
\textsuperscript{31} ENI 2013
Las mujeres demandamos

Aprobación y aplicación efectiva de la Ley de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Esa ley debe definir las políticas públicas para que las instituciones del Estado cumplan con su deber de proteger y garantizar el derecho de mujeres a vivir libres de violencia, a través de lineamientos como los siguientes:

1. **Mejores estadísticas.** Fortalecer y consolidar sistemas estadísticos existentes para el levantamiento de información permanente actualizada y confiable sobre situación de la violencia basada en género en el país y difundir ampliamente esta data con miras a la concienciación y la toma de decisiones.

2. **Articulación y fortalecimiento de mecanismos de respuesta a la violencia de género.** Fortalecer los mecanismos policiales, judiciales y de salud existentes dirigidos a atender la problemática de la violencia de género en el país con miras a eficientizarla. garantizar las articulaciones interinstitucionales necesarias para dar respuesta rápida y efectiva a las mujeres violentadas. Hacer efectivos estos mecanismos también para el caso de mujeres haitianas en territorio nacional.

3. **Unidades de Atención y Centros de Acogida en cada provincia.** Establecer Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Centros de Acogida en cada provincia y en número suficiente. Estas unidades deben estar adecuadamente especializadas en la atención...
casos de violencia de género a fin de asegurar el adecuado seguimiento a la capacitación, supervisión y terapia a víctimas, así como a hombres con conductas violentas.

4. capacitación y dotación de recursos del personal policial, judicial y sanitario, con miras a la eficientización de la intervención de este personal (judicial, médico, social, pedagógico, policial y de inmigración) en el área de derechos de las mujeres y violencia de género. Incorporar en los programas formativos contenidos específicos sobre violencia de género.

5. Asignación de recursos necesarios en el presupuesto del Estado para acciones relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer y el cumplimiento de la asignación correspondiente a los diversos programas dirigidos a víctimas. A nivel municipal debe destinarse un 1.33% del presupuesto municipal a la atención integral al tema de la violencia de género y a la capacitación de las mujeres para incrementar sus niveles de participación y poder en todas las instancias políticas y del Estado.

6. Mejora del acceso a la justicia por parte de las víctimas. Implementar programas de acceso gratuito, oportuno y eficiente de mujeres pobres víctimas de violencia de género a la justicia.

7. Integrar al sistema educativo la construcción de relaciones de género con enfoque de derecho, basadas en el respeto, que impulsen cambios en las ideas y comportamientos de niños, niñas y jóvenes.